

C.A. de Santiago

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

En estos autos RIT 70-2022 del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, RUC N° 1910067263-7, por sentencia de doce de mayo de dos mil veintidós, la sala integrada por las juezas doña Patricia Inés Brundl Riumalló, doña María Inés Collin Correa y doña María José García Ramírez, condenó a Sergio Jairo Adonis González Miranda, a la pena de presidio perpetuo calificado, a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado y a la de sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal, como autor en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal del delito de robo con homicidio, en grado de desarrollo de consumado, en perjuicio de Albertina Martínez Burgos, cometido el día 20 de noviembre del 2019 en la comuna de Santiago. La misma sentencia, considerando que el sentenciado no cumple con los requisitos necesarios para ser beneficiado con alguna pena sustitutiva, dispuso el cumplimiento efectivo de la pena impuesta, reconociéndole como abono a su favor los días que permaneció privado de libertad con motivo de la causa, esto es, desde el día 12 de febrero de 2020, y lo eximió del pago de las costas de la causa, ordenando, además, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 20.568, oficiándose al Servicio Electoral en su oportunidad.

En contra de esta sentencia la defensa del sentenciado González Miranda dedujo recurso de nulidad, el que fundó en la causal prevista en la letra b) del artículo 373 y en la contemplada en el artículo 374 letra e), en relación con el artículo 342 letra c), todos del Código Procesal Penal, ésta en subsidio de aquélla.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la defensa del acusado invoca en primer lugar la causal del artículo 373 letra b) del Código Penal, que hace consistir



en una errónea aplicación del derecho al establecer el tipo penal de robo con homicidio, debiendo, a su juicio, haberse aplicado el de homicidio simple y hurto, porque así se desprendería de la declaración del propio acusado y de los testigos que depusieron en estrados, entre ellos la de la hermana de la víctima, no habiéndose incorporado antecedente alguno que pudiese acreditar que efectivamente existió una planificación previa por parte del imputado tendiente a cometer un homicidio para robar, sino sólo que cometió homicidio, y que después de dejar amarrada a la víctima, transcurridos unos minutos y con la finalidad de cambiarse de ropa, aprovechó de hurtar algunas cosas, las que claramente no eran de gran valor monetario en términos que pudieran denotar que el acusado tenía la convicción de querer matar para apropiarse de las especies, en este caso un computador, audífonos y una mochila.

La recurrente fundó, también, la causal en comentario en que a su juicio el tribunal oral cometió un error grave al considerar, en el motivo decimoquinto, que en atención a que Jairo González Miranda registra condenas previas en su extracto de filiación de adolescente, no le asiste la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior; error que se configura por cuanto el extracto de filiación -de adulto- no registra anotaciones, y además no se acompañaron copias de sentencias, debidamente autorizadas por los respectivos tribunales, para determinar las fechas de condena, ejecutorias o eventuales cumplimientos.

Asimismo, hizo consistir la causal en estudio en el error de derecho que habría cometido el tribunal al desestimar la concurrencia de la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, por cuanto durante el período de investigación, renunciando a su derecho a guardar silencio, el imputado prestó declaración que fue ratificada después en el juicio oral, entregando antecedentes desconocidos. Hace presente que la jurisprudencia actual nos señala que existen diversos estándares para el reconocimiento de la mencionada atenuante, incluso siendo reconocida por el solo hecho de aceptar responsabilidad en los hechos imputados.



Finalmente fundó esta causal en una errónea aplicación de la agravante del artículo 12 N° 6 del Código Penal, por cuanto el tribunal, para considerarla concurrente, señaló, por ejemplo, la estatura de la víctima, a pesar de que no se presentó prueba o examen físico para acreditar que existiera una gran diferencia entre ésta y el imputado, por lo que se trata de una cuestión netamente interpretativa por el solo hecho de ser éste un hombre y aquella una mujer; motivo por el cual estima que la agravante debe ser rechazada.

En segundo lugar, el recurso invoca la causal del artículo 374 letra e), en relación con el artículo 342, letra c), del Código Penal, por omisión de una exposición clara, lógica y completa de los hechos que se dieron por probados y de la valoración de los medios de prueba.

La funda, en primer lugar y respecto del rechazo de la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, en que existen elementos que el acusado habría señalado y que no se tuvieron por acreditados, citando como por ejemplo el registro del acusado antes de ingresar al inmueble de la víctima.

En relación con la misma circunstancia atenuante, aduce que si bien hay circunstancias o elementos que, atendido el tiempo del hecho, el acusado pudo haber olvidado, éste manifestó claramente que conocía a la víctima mediante una aplicación por la que vendía droga, y que fue la hermana de ésta quien señaló que, efectivamente, ella le había comentado que compraba droga a través de la misma aplicación referida por el acusado, por lo cual dichos elementos, que contextualizan lo ocurrido, debieron ser valorados junto con la prueba rendida.

Respecto de la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, indica que se cometió una errónea aplicación del derecho y que la prueba material objetiva que se presentó no se condice con lo que en derecho corresponde, por cuanto el tribunal rechazó reconocer dicha atenuante a pesar de que la defensa incorporó como prueba el extracto de filiación que da cuenta de que el acusado carece de antecedentes penales, a lo que se suma que las eventuales condenas que tenía como menor, no fueron



corroboradas en el extracto de filiación ni tampoco con sentencias debidamente autorizadas por el tribunal, por lo que correspondía acoger la atenuante.

Finalmente, en cuanto a la circunstancia agravante del artículo 12 N° 6 del Código Penal, cuestiona que no se acompañó ningún informe respecto a la contextura física del acusado, su estatura y peso, que pudiera ser comparado con el de la víctima, ni se estableció que el imputado estuviese premunido de algún arma blanca o de fuego que le permitiera establecer la circunstancia agravante, por lo que no quedaba más que rechazarla.

SEGUNDO: Que el libelo recursivo es preciso al expresar las peticiones concretas que somete a la decisión de esta Corte.

Al efecto, luego de fundamentar la primera causal del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, señala: *“PETICIÓN CONCRETA: Que en virtud de lo expuesto, solicito se deje sin efecto sentencia de fecha 12 de mayo del presente año, en la cual se condena a mi representado a la pena de presidio perpetuo calificado, por el delito de robo con homicidio, decretando en su lugar sentencia de reemplazo, que lo que corresponde era condenar a mi representado por el delito de homicidio simple y delito de hurto, se reconozcan las atenuantes contempladas en el artículo 11 numerales 6 y 9 del Código Penal, rechazando la agravante contemplada en el artículo 12 N°6, del cuerpo legal ya citado, y condenar a mi representado a la pena de 10 AÑOS Y UN DÍA Por delito de homicidio y 61 días por delito de hurto, en virtud de lo expuesto, o en su defecto, anular la sentencia, y ordenar la realización de un nuevo juicio oral, ante tribunal no inhabilitado”*.

Enseguida, después de exponer los fundamentos de la causal del artículo 374 letra E, en relación con el artículo 342 letra C, ambos del Código Procesal Penal, expresa: *“PETICION CONCRETA: En virtud de las alegaciones realizadas, solicito se reconozca la atenuante contemplada en el artículo 11 N°6 y artículo 11 N°9, se rechace la agravante contemplada en el artículo 12 N°6, todas del código Penal, en razón de los antecedentes ya expuestos, los cuales doy por reproducidos”*.



Finalmente, la recurrente concluye su escrito solicitando “*tener por interpuesto recurso de nulidad en contra del juicio y de la sentencia dictada por el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago con fecha 12 de mayo del presente año, acogerlo a tramitación, declararlo admisible , concederlo y ordenar se eleven los autos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para que dicho Ilustrísimo Tribunal conozca del recurso y lo acoja, declarando la nulidad de la audiencia de juicio oral y de la sentencia definitiva dictada, en virtud de la causa principal del artículo 373 letra B o en su defecto dictar sentencia de reemplazo, como se señaló en la petición concreta o de la causal subsidiaria del artículo 374 letra E ambas del Código Procesal Penal , retrotrayendo la causa al estado que corresponda y ordenando la realización de nuevo juicio oral por el Tribunal no inhabilitado que corresponda*”.

TERCERO: Que el recurso de nulidad penal es de derecho estricto, lo que significa, entre otras cosas, que en él deben estar claramente consignados no sólo sus fundamentos sino, también, las peticiones concretas que se someten al fallo de la Corte. En este sentido, el artículo 378 del Código Procesal Penal eleva a la categoría de *requisito* del escrito de interposición el señalamiento de tales extremos, de suerte que su omisión o cualquier defecto que impida su cabal comprensión obsta a que el recurso pueda ser acogido.

Ahora bien, lo cierto es que, en el presente caso, de la lectura del libelo del recurso se desprende que, respecto de la primera causal invocada, la defensa del acusado planteó peticiones contradictorias entre sí y que, por ende, impiden a esta Corte entender qué es aquello que, en definitiva, pretende en concreto el recurrente con ella. Por su parte, en relación con la causal subsidiaria, el libelo omite una petición concreta que resulta esencial para que pueda ser acogido, a saber, la de declarar la nulidad de la sentencia. Así, al dejar indefinidos -en el caso de la causal principal- y trancos -en el caso de la causal subsidiaria- los contornos de la competencia atribuida a estos sentenciadores; el recurso no se encuentra en condiciones de prosperar.



En efecto, en relación con la causal principal, del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, en primer lugar, la parte recurrente, inmediatamente después de exponer los fundamentos en que la sustenta, plantea como únicas peticiones las de *dejar sin efecto la sentencia impugnada* y dictar en su lugar sentencia de reemplazo, o en su defecto *anular la sentencia* y ordenar la realización de un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado.

Sin embargo, en el petitorio del libelo recursivo, pide declarar la nulidad de la audiencia de juicio oral y de la sentencia definitiva dictada, retrotrayendo la causal al estado que corresponda y ordenando la realización de nuevo juicio oral por el Tribunal no inhabilitado que corresponda.

Como se podrá advertir, la petición en orden a dejar sin efecto o anular sólo la sentencia recurrida, resulta contradictoria con la de declarar la nulidad del juicio oral y de la sentencia, defecto que impide comprender qué persigue, concretamente, el recurrente con su arbitrio y cuál es, en consecuencia, la competencia que otorga a la Corte.

Por su parte, en lo concerniente a la causal subsidiaria del artículo 374, letra e), en relación con el artículo 342, letra c), del Código Procesal Penal, el recurso incurre asimismo en un defecto formal de sus peticiones que impide acogerlo, en cuanto, luego de exponer los fundamentos de la causal, no pide que se declare nulidad alguna, sino sólo que se reconozcan las circunstancias atenuantes de los numerales 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal y que se rechace la concurrencia de la agravante del artículo 12 N° 6 del mismo cuerpo legal. Posteriormente, al final de su escrito, solicita únicamente dictar sentencia de reemplazo en dichos términos. Las peticiones así formuladas, a la luz de lo que dispone el artículo 385 del Código Procesal Penal, no pueden ser acogidas por esta Corte, puesto que, al no haberse solicitado en relación con esta causal declarar la nulidad de la sentencia impugnada, el tribunal carece de competencia para hacerlo, como asimismo para dictar, por consecuencia, una sentencia de reemplazo.



CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, la causal principal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, no puede prosperar, además, por las siguientes razones.

En efecto, dicha norma legal permite declarar la nulidad total o parcial del juicio oral y de la sentencia, si el vicio hubiere generado efectos que son divisibles y subsanables por separado sólo respecto de determinados delitos o recurrentes, cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Así, este motivo de nulidad pone en discusión únicamente la correcta aplicación del derecho, y supone, por ende, la aceptación de la realidad fáctica establecida en la sentencia, que no puede, en consecuencia, ser alterada en virtud de esta causal.

En la especie, según se lee del párrafo final del considerando noveno de la sentencia impugnada, ésta dio por establecidos los siguientes hechos: *“El día 20 de noviembre de 2019 a las 02:45 horas aproximadamente, Jairo Adonis González Miranda, quien conducía una motocicleta, llegó hasta el domicilio de Albertina Mariana Martínez Burgos, ubicado en calle Santa Elena 1631, comuna de Santiago, dirigiéndose e ingresando al departamento 1213, en que se encontraba la víctima, para luego, con motivo de apropiarse de diversas especies, procedió a golpearla en su cara, cabeza y cuerpo, inmovilizándola con un cable de alargador de corriente eléctrica, atando sus pies, manos y cuello, para luego asfixiarla con un paño de cocina, ocasionándole la muerte por estrangulación con lazo, con signos de sofocación por cuerpo extraño y traumatismo encefalocraneano, logrando apropiarse de su mochila, una casaca, y unos audífonos. Procediendo, a las 04.00 horas, a salir del domicilio de la víctima, vistiendo de forma diferente y portando, ostensiblemente, las especies previamente sustraídas, huyendo del lugar a bordo de la motocicleta que había dejado estacionada frente al edificio de departamentos.”.*

Sin embargo, la defensa recurrente plantea, en cuanto a la calificación jurídica de robo con homicidio, que el tribunal erró en ella,



toda vez que debió haber aplicado los tipos penales del homicidio simple y del hurto, por cuanto, a su juicio, el homicidio se generó con el accionar del acusado, quien como un hecho posterior a dejar amarrada a la víctima, transcurridos unos minutos y con la finalidad de poder cambiarse de ropa, aprovechó de hurtar algunas cosas, que no eran elementos de un gran valor monetario que pudiera llevarlo a tener la convicción de querer matar para apropiarse de ellas.

Como puede apreciarse, el recurrente discute, para fundar la causal, uno de los hechos que la sentencia dio por establecidos, a saber, que cuando en el día y hora de los hechos el acusado concurrió e ingresó al domicilio de la víctima -en el que ésta se encontraba- procedió *“con motivo de apropiarse de diversas especies”* a golpearla en su cara, cabeza y cuerpo, inmovilizándola con un cable de alargador de corriente eléctrica, atando sus pies, manos y cuello, para luego asfixiarla con un paño de cocina y ocasionarle la muerte, logrando apropiarse de su mochila, una casaca y unos audífonos. En efecto, el recurrente pretende que esta Corte altere dicho extremo fáctico y tenga por cierto que las acciones del acusado tendientes a causar la muerte de la víctima no estaban vinculadas causalmente con su intención de robarle especies, hecho que la sentencia, como se ha visto, establece expresamente.

En estas circunstancias, discutiendo la causal en comentario sobre la base de una modificación de los hechos establecidos en la sentencia que permita calificarlos del modo que pretende la recurrente, la misma no puede prosperar, por no ajustarse a los límites que le impone la norma legal que la consagra.

QUINTO: Que, por otra parte, la causal en comentario, pero en cuanto se funda en que la sentencia incurriría en un errada aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al estimar que no concurre a favor del acusado la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, debe ser igualmente desestimada, habida cuenta de que, al considerar el tribunal oral que, debido a que el acusado presenta condenas previas en su extracto de filiación de adolescente -hecho no discutido en el recurso-, su conducta pretérita no puede ser calificada de irreprochable, hizo una



correcta aplicación de la norma legal citada, desde que ésta exige, para que se pueda configurar la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, que el comportamiento pretérito del acusado se encuentre libre de censuras, cuestión que en caso alguno podría estimarse cumplida en la especie, ante la evidencia de las condenas penales como adolescente que registra, que constituyen precisamente reproches penales a su actuar, establecidos y sancionados por un tribunal penal; lo que no deja de ser tal por la sola circunstancia de que el reproche responda a hechos cometidos siendo adolescente, pues ha sido la propia ley la que ha establecido todo un sistema penal especial tendiente, justamente, a sancionarlos haciendo, con ello, jurídicamente evidente su reprochabilidad.

SEXTO: Que la causal en estudio debe, también, ser desestimada en cuanto aduce que el tribunal oral hizo una errada aplicación del derecho al estimar no concurrente la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal. En efecto, de la lectura del fallo recurrido se desprende que, para desechar esta atenuante, tuvo por establecido que, si bien el acusado prestó declaración en estrados, en lo medular de lo que era materia de la acusación faltó a la verdad, según lo acreditado con la prueba rendida, que detalla; y que sus restantes dichos en cuanto a la dinámica de lo ocurrido en el departamento de la víctima y que terminaron con su muerte, no fue acreditado, a lo que agrega que, apenas cometido el hecho, el acusado se cambió de ropa en dos oportunidades y, cuando supo que la policía lo buscaba, huyó, procurando evitar la acción de la justicia hasta el último momento. En tales circunstancias, el tribunal dio por sentado que el acusado no colaboró sustancialmente con la investigación, base sobre la cual aplicó correctamente el derecho al entender que no favorece al encartado la circunstancia en comento, toda vez que la norma legal que la consagra exige para que se configure que el acusado haya, precisamente, colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos; circunstancia fáctica que, como se ha dicho, el tribunal tuvo por no establecida.



SÉPTIMO: Que, finalmente, debe ser también desestimada esta causal en cuanto arguye una errada aplicación del artículo 12 N° 6 del Código Penal, que establece como circunstancia agravante la de abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. En efecto, para estimarla concurrente, el tribunal tuvo por establecido *“que el inculpado, aprovechándose de la superioridad de su fuerza y de su sexo, neutralizó absolutamente las posibilidades de defensa de Albertina Martínez al momento de cometer el delito, puesto que, además de ser ella de baja estatura y contextura delgada, había consumido alcohol y drogas, disminuyendo de ese modo su posibilidad de defensa y, a mayor abundamiento, el imputado, no contento con haberla agredido físicamente con golpes de puño, procedió a amarrarla y amordazarla, impidiendo así cualquier reacción de defensa de su parte”*.

Como se indicó precedentemente, tales hechos no pueden ser modificados con motivo de la causal en estudio, sino que para que ésta pueda prosperar el recurrente debe demostrar que, manteniéndolos inalterados, el derecho fue aplicado erróneamente, con influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia. Pues bien, en la especie, según se desprende de la lectura del libelo, la parte recurrente pretende que el tribunal altere esos hechos, pues señala, fundando esta causal, que lo que cuestiona es que el tribunal señaló, por ejemplo, la estatura de la víctima, no obstante que no se presentó prueba o examen físico para acreditar que existiera una gran diferencia entre la víctima y él, por lo cual se trata de una cuestión netamente interpretativa por el solo hecho de ser hombre y ella mujer. Esta argumentación del recurso deja en evidencia que con ella se busca que esta Corte modifique los hechos ya referidos dando por sentado que la víctima no tenía una gran diferencia de estatura con el acusado, puesto que esto no se encontraría probado; modificación fáctica que, aparte de no ser posible jurídicamente en el contexto de la causal en estudio, en todo caso resultaría insuficiente para configurar en la especie un motivo de invalidación del fallo, toda vez



que la estatura no fue la única circunstancia considerada por el tribunal para entender concurrente la circunstancia agravante referida.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, en lo que dice relación con la causal del artículo 374 letra e), en relación con el artículo 342 letra c), ambos del Código Penal, consistente en haber la sentencia omitido una exposición clara, lógica y completa de los hechos que se dieron por probados y de la valoración de los medios de prueba, también ha de ser desestimada por los siguientes motivos.

En primer lugar, porque el primer fundamento en que se hace consistir la causal no la configura, esto es, que respecto de la circunstancia atenuante de colaboración sustancial, prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, existirían elementos que el acusado habría señalado y que, sin embargo, no se tuvieron por acreditados. En efecto, esto último significa simplemente que el tribunal valoró la prueba de una manera diversa de aquella en que lo hace la defensa, llegando a conclusiones fácticas distintas en relación a la pretendida colaboración del acusado al esclarecimiento de los hechos, mas no que no hubiere cumplido con la exigencia de fundamentación que impone el artículo 342, letra c), del Código Procesal Penal.

En segundo lugar, porque del análisis de la sentencia recurrida, en especial su motivo décimo quinto, se desprende que contiene una exposición clara, lógica y completa de los hechos que se dieron por probados y de la valoración de los medios de prueba que sustentan la conclusión a la que llegaron los sentenciadores en orden a que, si bien el acusado prestó declaración en estrados, en lo medular de lo que fue materia de la acusación faltó a la verdad: **a)** al referir que amarró a la víctima sólo de una mano, en circunstancias que fue acreditado por el Ministerio Público y el tribunal oral pudo apreciar, que se encontraba amarrada y fuertemente de ambas manos; **b)** al omitir que la había estrangulado con un cable eléctrico y amarrado el cuello con un mantel que además introdujo en su boca sofocándola, habiendo señalado que sólo le puso un paño de cocina alrededor de la boca para que no gritara; **c)** al haber alegado que fue golpeado por



la víctima previo a agredirla, quedando con una marca visible en el rostro, lo que, sin embargo, no fue apreciado en las cámaras de seguridad durante el juicio ni tampoco lo apreciaron todos los testigos que analizaron dichas imágenes; y **d)** por último al expresar que el día de los hechos se registró en conserjería del edificio de la víctima anotando su nombre, apellido y RUT, lo que no fue efectivo ya que así lo señaló el conserje en el juicio y apareció en las imágenes de las mencionadas cámaras. Agrega la sentencia que sus demás dichos en cuanto a la dinámica de lo ocurrido tampoco fueron acreditados, y que, además, apenas cometido el hecho, se cambió de ropa en dos oportunidades el acusado y cuando supo que la policía lo buscaba, huyó, procurando evitar la acción de la justicia hasta el último momento.

En tales circunstancias, el hecho de que el acusado hubiere indicado que conoció a la víctima mediante una aplicación por la que le vendía droga, hecho que habría corroborado la hermana de ésta en una contra interrogación del abogado defensor, en nada controvierte o desvirtúa las circunstancias fácticas en las que el tribunal oral fundó su decisión de desestimar la concurrencia de la circunstancia atenuante de colaboración sustancial, de modo que su omisión en dicho análisis no configura una falta a las exigencias del artículo 342, letra c), del Código Procesal Penal, y no puede servir, tampoco, para configurar la causal de nulidad del artículo 374, letra e), del mismo cuerpo legal.

En tercer lugar, este motivo de nulidad debe ser desechado, asimismo, en cuanto se relaciona con la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, por cuanto el hecho de que, en el análisis que concluyó desestimando dicha circunstancia atenuante, el tribunal no se hubiese referido al extracto de filiación sin condenas del acusado, no importa incumplimiento de la exigencia del artículo 342, letra c), del Código Penal, desde que, dando por sentada la ausencia de anotaciones en el extracto de adulto, concluyó que su conducta no puede estimarse irreprochable debido a las condenas que figuran en su extracto de filiación como adolescente, las que fueron invocadas y detalladas por el Ministerio Público en la audiencia del artículo 343



del Código Procesal Penal -según aparece consignado en la sentencia- y no fueron controvertidas por la defensa, quien sólo se limitó a señalar al respecto que los registros de menores delincuentes no pueden usarse en perjuicio suyo como adulto.

Finalmente, esta causal de nulidad debe, también, ser desestimada en lo que toca a la circunstancia agravante del artículo 12 N° 6 del Código Penal, por cuanto, al tratarse de un reproche legal a la forma de la sentencia, no la puede configurar la pretendida omisión que se invoca de la parte acusadora en rendir determinadas pruebas, como así tampoco que no se hubiesen establecido determinados hechos no considerados para acreditar la agravante, como el que invoca la recurrente en el sentido de que el imputado haya estado premunido de algún arma blanca o de fuego.

NOVENO: Que, en razón de todo lo expresado, el recurso de nulidad en examen será rechazado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 372, 378 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del condenado Jairo González Miranda en contra de la sentencia de doce de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en los autos RIT 70-2020, RUC N° 1910067263-7, la que, en consecuencia, **no es nula**.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro interino don Matías de la Noi Merino.

N°Penal-2285-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Carolina S. Brengi Zunino, e integrada, además, por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y el ministro (I) señor Matías de la Noi Merino. En Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

DSLBXBBPYEX





DSL BXBBPYEX

Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Carolina S. Brengi Z., Tomas Gray G. y Ministro Suplente Matias Felipe De La Noi M. Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

